

AMPARO

Promovido por el C. Francisco Zedillo contra el C. Lic. Vicente Rodríguez Villanueva, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, por violación de garantías Constitucionales.

PREMIUM DEL C. PROMOTOR FISCAL

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que el C. Francisco Zedillo presentó escrito con fecha 7 del actual pidiendo, que declarado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado, haber lugar á formarle causa por sus procedimientos como Juez segundo sustituto de primera instancia, en la averiguación que instruyó contra Quirino Aguilar por homicidio, la Sala única de ese Tribunal comisionó por mayoría de votos al C. Lic. Vicente Rodríguez Villanueva, segundo Magistrado, para que conociera en primera instancia, que sin estar conforme con el personal ni con la determinación de la Sala, y solo por evitar los perjuicios que le acarrearía su resistencia, prestó su declaración preparatoria, y ocho días después sin trámite ni diligencia intermedia, se proveyó un auto que se le notificó en la fecha del escrito, previniéndole que en el perentorio término de doce horas, saliese de esta Capital á un punto cualquiera que distara mas de seis leguas, con arreglo al artículo 27, capítulo primero del decreto de 24 de Marzo de 1873: que esa resolución había sido dictada por un Juez especial establecido con posterioridad y *ad hoc* para conocer de su causa, pues á tal establecimiento equivalía la comisión dada por el Tribunal al C. Lic. Rodríguez Villanueva, pugnaba con las garantías que para los acusados en todo juicio criminal establece el artículo 20 de la Constitución, y por ella se le imponía una pena inusitada, mayor que la que pudiera imponerse en

la sentencia, como resultado de la causa y sin juicio previo, por lo que pedia se mandara suspender el acto reclamado con solo la presentación del escrito, pues las doce horas se cumplían á las ocho de la mañana siguiente, y se le amparase contra la determinación del C. Magistrado Rodríguez Villanueva, en el goce de las garantías que otorgan los artículos 13, 14, 20, 21 y 22 de la Constitución, advirtiéndole que el jefe de la policía estaba encargado de hacerle salir al espirar el término. El escrito se presentó á la una y media de la mañana del 8, y con esa fecha se mandó hacer saber al C. Magistrado Rodríguez Villanueva, que este Juzgado había determinado saliera el quejoso á dos leguas fuera de esta Capital, interin se recibía el informe de la autoridad ejecutora. El C. Rodríguez Villanueva, contestó en oficio de la misma fecha, que no era la autoridad inmediatamente ejecutora del acto reclamado; que no entendía qué garantía individual hubiera violado su determinación, atenta la parte final del artículo 11 de la Constitución de la República; que no reconocía jurisdicción alguna en este Juzgado, por tratarse de un negocio judicial en los que no cabe amparo, segun el artículo 8 de la ley de 20 de Enero de 1869, y que mucho menos podía reconocer la facultad para reformar las disposiciones del Tribunal, limitándose por tanto á insertar su auto, las disposiciones que cita, sin tener que modificarlo por no haber decretado este Juzgado que se suspendiera su ejecución. Con la misma fecha se recibió nuevo oficio del C. Magistrado Rodríguez Villanueva, en el que sin conocer jurisdicción é insertando la certificación de estar inhibido por escusa admitida, el C. Ministro Quiñones para conocer de la causa de Zedillo que se le pasó como semanero en turno, y el auto del Tribunal de 22 de Mayo designando al C. Rodríguez Villanueva como semanero actual para instruir esa causa, y el artículo 46 del Reglamento del mismo Tribunal, que dice: que teniendo noticia

privada de que la garantía que se invoca en este recurso, es la que otorga el artículo 14 de la Constitución, manifestaba para favorecer el acierto de este Juzgado, ser falso que el quejoso fuese juzgado por un Tribunal especial. Al día siguiente se declaró no haber mérito para la continuación del recurso conforme al artículo 8º de la ley de 20 de Enero de 1869, se remitió las actuaciones á la Suprema Corte de Justicia, y devueltas que fueron para que se sustanciara el juicio, se mandaron pasar al que suscribe para que pidiera sobre lo principal. El quejoso no ha pretendido que el Tribunal Superior del Estado fuese incompetente para declararlo con lugar á formación de causa, ni que lo fuese tampoco uno de sus Ministros para juzgarle en primera instancia. Dice únicamente, que sin estar conforme con el personal ni con la determinación de la Sala, se presentó ante el Tribunal y prestó su declaración preparatoria por evitar los perjuicios que le acarrearía su resistencia; de manera, que su falta de conformidad, se refiere solo á la admisión de la excusa del C. Magistrado Quiñones; sin que antes se le hubiera saber, y que el Tribunal hubiese resuelto sin hacerle conocer su nuevo personal. Pero dice que la designación del C. Rodríguez Villanueva, hecha por el auto de 22 de Mayo, que obra transcrito á fojas 11 vuelta, equivale al establecimiento de un Tribunal especial para juzgarle, siendo así que debió seguirse el orden de turno de los Ministros semaneros, para que conociese al que tocara cuando se presentase.

El artículo 46 del reglamento del Tribunal Superior del Estado, transcrito á fojas 12, previene que los Ministros incluso el Presidente se turnaran para servir el cargo de semaneros, y sus obligaciones son, formar las sumarias que comenzaren estando de semaneros, que continuara mientras permaneciere en la Sala practicando todas las diligencias no encomendadas á otro Ministro, y conforme á esa prevención correspondía juzgar la responsabilidad del quejoso al Tri-

bunal Superior, y conocer en primera instancia al Ministro que fuese semanero al comenzar el sumario. Pero no está determinado quien deba suplir al Ministro semanero cuando esté impedido para esas funciones; parece natural que como se dice en el escrito de queja, se siguiera el turno pasando la causa al semanero siguiente, y esa opinión se corroboraba por los términos del auto del Tribunal que mandó pasar la causa al Sr. Rodríguez Villanueva, como semanero actual. El artículo 107 de la constitución del Estado establece: que en las causas por responsabilidad de los Jueces de primera instancia y de los que hagan sus veces, pasarán á conocimiento de uno de los Ministros en primera instancia, y serán revisadas por la Sala que se integrará con el suplente respectivo, y aunque por la fracción 2ª del artículo 46 del reglamento, pudiera pretenderse que la Sala tiene facultad para encomendar la práctica de algunas diligencias á cualquiera de sus Ministros, no debe entenderse que pueda condicionar ó designar á su arbitrio al Ministro que deba conocer en la primera instancia de los juicios que le están reservados, y aun el espíritu de ese artículo parece restringido á determinadas y especiales diligencias, pues dice textualmente: "Sus obligaciones serán: Segunda: examinar los testigos y formar las sumarias que comenzaren estando de semanero, las que continuara aun acabada su semana interin permanezca en la Sala, debiendo también presidir las juntas de los litigantes, y practicar todas las demás diligencias que la Sala no encomendase á otro Ministro". Ahora bien, si admitimos que la sumaria en nuestro caso comenzó por la declaración de haber lugar á formación de causa contra el quejoso, que ocuparía el lugar del auto cabeza de proceso, correspondía formar la sumaria al Ministro que fuese semanero en la fecha de esa declaración que no se ha mencionado hasta ahora en estos autos, y si entonces era semanero el C. Magistrado Quiñones, debía pasar la causa al

semanero inmediato. Pero la certificacion de la secretaria del Tribunal transcrita á folios 11 vuelta, no tiene fecha é ignoramos hasta ahora el orden de turno de los Ministros semaneros. ¿Y importaría realmente el establecimiento de un Tribunal especial la designacion arbitraria de cualquiera Magistrado, para juzgar al quejoso? Si la jurisdiccion procede solo por razon de oficio, y para conocer en primera instancia de la causa de Zedillo, era necesario no solo el caracter de Ministro, sino la circunstancia ademas de funcionar como semanero al comenzar el sumario, la designacion arbitraria, salvando el orden de turno y atendiendo á las circunstancias personales de un Magistrado, es indudablemente contraria al espíritu del artículo 13 de la Constitucion, que prohibe el conocimiento y decision de las causas por personas especialmente establecidas para favorecer ó perseguir á los procesados. Si la Sala pudo limitarse á mandar que pasara la causa al semanero inmediato, ¿á qué mencionar al C. Rodriguez Villanueva? ¿y se trataba de un simple trámite marcado por el reglamento? ¿por qué la mayoría y no la unanimidad de votos en esa determinacion? ¿se abstuvo de votar el C. Rodriguez Villanueva para no designarse á sí mismo? ¿opinó en contra alguno de los Magistrados? Y el establecimiento de ese Tribunal para la primera instancia de la causa que nos ocupa, pugnaría ademas con el artículo 14 de la Constitucion que garantiza la aplicacion de la ley, es decir el juicio, por los Tribunales previamente establecidos. Sin embargo, como antes dije, no consta hasta ahora en estos autos, la fecha en que se declaró haber lugar á la formacion de causa; ignoramos tambien cuando se pasó al C. Magistrado Quiñones, y si hubo semanero intermedio hasta el 22 de Mayo; si el C. Rodriguez Villanueva fué el semanero inmediato, y conforme al reglamento le corresponde conocer en primera instancia, no sería Tribunal especial establecido *ex post facto* y su jurisdiccion sería legítima por

mas que parezca redundante é inutil su designacion que por mayoría de votos tuvo el Tribunal.

La determinacion de que Zedillo saliera á distancia de seis leguas para juzgarle, está inmemisiblemente conforme al artículo 27 del capítulo primero del decreto de 24 de Marzo de 1813; pero ¿era aplicable esa determinacion? ¿envuelve la violacion de las garantías individuales? El artículo citado previene: cuando se forme causa á un Magistrado de una audiencia ó á un Juez de primera instancia, el acusado no podrá estar en el pueblo en que se practique la sumaria ni en seis leguas en contorno, y el C. Blas J. Gutierrez en su nuevo "Código de la Reforma" nota 11^a al decreto de 24 de Marzo, tomo primero, pagina 380, dice: De esta manera el legislador creyó independier al Juez de la influencia del acusado, dejándolo en absoluta libertad para el procedimiento y alejar el natural peligro que corrían de sufrir la prision del poder del procesado los testigos y demas agentes que deben intervenir en el juicio, si aquel quedaba con todos los recursos y prestigio de su empleo, pudiendo utilizarlos, si no para influir en el ánimo del Juez ó para intimidar á su contra parte, al menos para obstaculizar la via de las pruebas, ó hacerlas resultar estériles ó benéficas á su persona." Es de advertir ante todo, que la nota y doctrina del Sr. Gutierrez, se refiere al artículo 12 capítulo 2º del decreto de responsabilidades, relativo á las causas que se formen contra los Jefes políticos é intendentes de provincia, y en mi concepto, es mucho mayor la influencia de las autoridades políticas que la de las autoridades judiciales para entorpecer ó nulificar el procedimiento. Efectivamente, los jueces solo pueden ejercer su autoridad *pro tribunali* en la sustanciacion y decision de los juicios, y quedan suspensos en su empleo, desde el momento que se declara haber lugar á formarles causa, lo que no sucede con las autoridades políticas, y estas ademas son juzgadas y pueden ser

acusadas ante los jueces de primera instancia; pero las causas de aquellos solo las instruyen y deciden sus inmediatos superiores, con quienes no se puede suponer tengan ascendiente ni influencia perjudicial á la justicia. La práctica que el citado autor presenta como no racional ni conforme á derecho, no se refiere pues á los jueces, y califica de sabia la disposicion que comenta, porque tiende á asegurar la independencia de los tribunales, y corta el entorpecimiento de las pruebas y de los procedimientos en esta causa de responsabilidad. Pero si las medidas preventivas solo proceden y se justifican cuando tienen por objeto evitar un delito, ó asegurar su represion una vez cometido, en nuestro caso no tenia objeto hacer que saliera el quejoso fuera de esta Capital, pues segun refiere en su escrito, habia entrado á desempeñar el juzgado como conciliador, para sustituir al C. L. Gallegos, y concluido ese interinato, habia dejado de tener el carácter de funcionario y de juez; de manera que ni podia temerse su influencia con el tribunal, ni los recursos y prestigios del empleo para ejercer presion sobre los testigos que hubieran de deponer en su contra. Ademá la violencia y manera con que se le obligó á salir, cuando habian trascurrido ocho dias desde la fecha de su declaracion preparatoria, sin que se dictase resolucion alguna, ni se practicara diligencia en su causa, carecia tambien de objeto para la justicia, y la medida preventiva inútil toma el caracter de molestia grave, atendiendo á que se le obligaba como dice, á abandonar su familia ó intereses, sin que la ley le proporcionara los medios necesarios de subsistencia. En mi concepto, la disposicion que previene que los jueces no puedan estar en el lugar donde se les juzga ni en seis leguas en contorno, pugna de una manera abierta con el principio de igualdad ante la ley, y con nuestro sistema de procedimientos. Efectivamente, se pretende la necesidad ó conveniencia de procedimientos anómalos y forma especial de juicios, porque los jueces pu-

dieran ser intimidados ó corrompidos; pero la nacion tiene el deber estricto de considerar á sus jueces como incorruptibles, y solo puede, atendiendo á la fragilidad de los hombres, imponer penas las mas severas para evitar que se trueza la justicia ante sus tribunales. Quitadas las distinciones y premienencias sociales, establecida la responsabilidad de los funcionarios por todos sus actos, la ley no debe temer que los jueces procesados obstruyan la via de las pruebas, y contra su influencia sobre los testigos tiene penas establecidas por falsedad y medios eficaces de apremiar para obtener sus declaraciones. Por otra parte, establecido como base de los procedimientos criminales, y la sencillez y brevedad oportuna de las actuaciones, el careo como medio de llegar al perfecto esclarecimiento de los hechos, y la mayor amplitud en el derecho de defensa, retirar al rco del lugar del juicio, debe necesariamente aumentar la duracion y dificultad de las diligencias, hace ineficaces, confusas ó torpes las declaraciones del acusado, carecen de objeto y resultado los careos supletorios y se entorpecerá indispensablemente la defensa. Por estas razones quizá el artículo 60 del Código penal vigente en la Federacion, no cuenta entre los medios de instruir un proceso á que no dá el carácter de penas, la relegacion ó destierro, y solo permite el arraigo, la detencion ó prision formal, la incomunicacion, la separacion de los empleos públicos de sus cargos y la suspension en el ejercicio de ellos, y por eso tambien casi nunca se aplica por los tribunales el artículo 27 capítulo 1º del decreto de 24 de Marzo de 1813. Se ha pretendido tambien, que conforme á la ley recopilada (11 tít. 3 lib. 2 N. R.) contra la observancia literal de la ley, no puede alegarse desuso ni practica en contrario; pero el artículo 22 de la Constitucion que prohíbe la imposicion de penas *inusitadas*, manifiesta de una manera palmaria, que las leyes penales se derogan ó modifican en su aplicacion literal por la falta de uso y por

la costumbre contraria, y el artículo 188 del código penal ya citado, que aunque no rija en los asuntos particulares del Estado, debe servir como doctrina, previene terminantemente: "no se estimará vigente ninguna ley penal que no se haya aplicado en los diez años últimos, si durante ellos hubieren ocurrido mas de cinco casos y en ninguno de ellos se hubiere señalado la pena impuesta en dicha ley sino otra diversa." Examinemos ahora si la disposicion reclamada es contraria á las garantías individuales establecidas por la Constitucion. El artículo 29 asegura para el acusado en todo juicio criminal, que se le caree con los testigos que depongan en su contra, y ya hemos visto que los careos supletorios ó retardados, ni llenan su objeto y solo deben tener lugar en los casos de imposibilidad para practicarlos eficazmente; pero el amparo de la Justicia federal solo tiene lugar contra la *ejecucion* de las leyes ó actos que violan las garantías individuales, y por mas que se presuma ó aparezca probable esa violacion, no procede el recurso constitucional hasta tanto que se haya verificado. No puede ampararse por consiguiente al quejoso por violacion de esa garantía, pues ni consta que haya habido testigos que depongan en su contra, ni se ha fenecido el juicio.

Pena, según Escribche, es un mal que la ley impone al delincuente, por el que este causó á la sociedad; pero esa definicion está tomada de su objeto y de su manera de aplicacion. En el sentido constitucional y por los términos de los artículos 21 y 22, se entiende por penas, los medios de que la ley se vale para reprimir los delitos y retraer de su perpetracion; y se distinguen la pena propiamente tal, y la correccion que no puede exeder de quinientos pesos de multa y un mes de reclusion. Se entiende por destierro, la expulsion de una persona de cierto lugar ó territorio, y como exede los límites de la correccion, es una pena propiamente tal, cuya aplicacion es exclusiva de la autoridad judicial, conforme al artículo 21

de la Constitucion. La pena presume juicio, defensa y sentencia; es decir, no puede aplicarse sino por el Juez competente previos los procedimientos jurídicos, la defensa y la declaracion de culpabilidad, y se violan los artículos 14 y 21 de la Constitucion, siempre que se impone una pena propiamente tal, como el destierro, por una autoridad distinta de la judicial, sin forma de juicio, sin que proceda la defensa, ni la declaracion de culpabilidad. Ahora bien, la determinacion reclamada en este recurso, expulsa al quejoso de esta Capital, y seis leguas en contorno sin que haya habido defensa en su favor, ni declaracion de culpabilidad en su contra. El artículo 22, con o ya queda expresado, prohíbe para siempre las penas inusitadas, y examinado ya que el destierro es una pena, y que jamas se aplica para formar un proceso como en el caso presente, su imposicion á Zedillo viola tambien esta prohibicion. Lejos de que se observe el artículo 27 capítulo 19 del decreto de 24 de Marzo tantas veces citado, nuestros tribunales han exigido la presencia de los jueces procesados, para que den sus declaraciones y presenten sus descargos. El acto reclamado viola, pues, las garantías que otorgan los artículos 21 y 22 de la Constitucion. Veamos por último, las razones alegadas contra la procedencia del amparo. El C. Magistrado Rodriguez Villanueva, repite en sus oficios que desconoce la jurisdiccion de este Juzgado de Distrito para resolver si su auto reclamado por Zedillo, viola las garantías constitucionales. Preseindiendo de que la autoridad ejecutora no es parte en los recursos de amparo, ni tiene otro derecho que el de informar con justificacion, según el artículo 9º de la ley de 20 de Enero de 1869, conforme al artículo 101 de la Constitucion y 1º de la ley orgánica citada, establece: los tribunales de la federacion resolverán toda controversia que se suscite, 1º, por leyes ó actos de cualquiera autoridad que viole las garantías individuales;" y el artículo 3º de esta

última, previene: "Es Juez de 1ª instancia el de Distrito de la demarcacion en que se ejecuto ó trate de ejecutarse la ley ó acto que motive el recurso de amparo." Se dice tambien que el mismo C. Magistrado no es la autoridad inmediatamente ejecutora del acto reclamado; pero ademas de que el derecho de informar está concedido en beneficio de las autoridades para que puedan sostener la legitimidad de sus actos, no se comprende que pueda existir un Juez ó tribunal sin *imperio*, es decir sin el poder de llevar á cabo sus decisiones y de ejecutar sus sentencias; y la intervencion del ejecutivo en este asunto, está limitada á prestar al poder judicial los auxilios necesarios y vigilar que se cumplan sus determinaciones. Se presenta como razon que impide ó justifica la violacion de garantías reclamada en este recurso, el artículo 11 de la Constitucion que reserva á la autoridad judicial la facultad de restringir la libertad de transitar en la República, que el mismo artículo garantiza á todos los individuos; pero es muy diverso restringir la libertad de separarse de un lugar ó mudar de residencia, á imponer la necesidad de separarse ó expulsar á un individuo. En el primer caso se restringe la libertad, en el segundo se obliga contra ella á mudar de residencia á una persona. La facultad reservada á las autoridades por ese artículo, es la de suspender el ejercicio de un derecho, pero de ninguna manera la de imponer el acto en que consiste su ejercicio independientemente de la existencia de ese derecho. Es mucho mas grave y absolutamente distinto evitar que una persona salga de determinado lugar, que expulsarlo de él, y por eso, está permitido para formar un proceso ó para evitar que se eluda la aplicacion de la ley, el arraigo, la detencion ó la prision, pero no está en el mismo caso, ni se considera medida preventiva el destierro. Por último, se invoca el artículo 89 de la ley de 20 de Enero de 1869, que prohibe la admision del recurso de amparo en negocios judiciales; pero la

Constitucion es la suprema ley de la República; no bastan á reformar sus preceptos las leyes contrarias, si carecen de los requisitos establecidos por su artículo 127, y los términos generales: "Toda controversia del artículo 101, hace admisible el recurso en cualquiera negocio y contra los actos de cualquiera autoridad." Por otra parte la disposicion del artículo citado, nunca podia entenderse de la manera tan lata que ahora se presenta, y de admitirlo sería necesario reconocer que impunemente y sin recurso podian violarse los artículos 13, 14, 17, 18, 20, 22 y 24 de la Constitucion, que solo tienen lugar y se refieren notoriamente á los negocios judiciales. Resumiendo: no está comprobado que el C. Zedillo sea juzgado y sentenciado por un tribunal especial; pero la resolucion del C. Magistrado Rodríguez Villanueva reclamada por aquel, viola las garantías que otorgan los artículos 14, 21 y 22 de la Constitucion, procede por consiguiente el recurso de amparo y es V. la autoridad competente para conocer de ese recurso. He procurado examinar ese negocio con toda detencion y aun estendiendo demasiado los fundamentos de mi peticion, por haberse ocupado del asunto anticipándose á la decision judicial, y presumiendo su resolucion la prensa periódica de la Capital, como puede verse en el núm. 71 del "Eco de Morelos." Estoy seguro de que procediendo con la justificacion é integridad que á V. caracteriza, y reconociendo tambien la buena fé que me es propia, pesará las razones de justicia que su esperiencia ó instruccion le sugieran ademas de las expuestas; pero en el concepto de que estas son procedentes y fundadas, cumpliendo con el auto de V. fecha 24, y conforme á la segunda parte del artículo 99 de la ley de 20 de Enero de 1869. El Promotor pide: se declare en definitiva, que la justicia de la Union ampara y protege al C. Francisco Zedillo en el goce de las garantías que otorgan los artículos 14, 21 y 22 de la Constitucion, contra la determina-

cion del C. Magistrado Vicente Rodriguez Villanueva, mandando que aquel permanezca fuera de esta Capital, y á una distancia mayor de seis leguas, durante el sumario de la causa de responsabilidad que se le instruye.

Cuernavaca, Junio 30 de 1873.—*Nicolás Melina.*

Sentencia del C. juez de Distrito.

Cuernavaca, Junio 30 de 1873.—Visto este juicio promovido por el C. Francisco Zedillo solicitando amparo contra el ciudadano Magistrado Vicente Rodriguez Villanueva, y pidiendo la suspension de la relegacion á seis leguas fuera de esta ciudad,

ni aun detenido, era claro a pena corporal y el destierro es sin duda, y como tal se artículo veintinueve del Código Distrito: en segundo lugar, esa o medida preventiva, es de tan nosotros, que casi puedo decirse, y que se coló mano poderse aplicar la de prision, violó el artículo veintidos.

lo: que si en el auto de 8 del concluye, se negó la entrada ser negocio judicial del que en el que se decian infrin- tías mencionadas, atento el y de amparos, tal determina- uando ya Zedillo estaba sal- en que este Juzgado lo creyó cha del auto, por las razones el informe con que las diligen- mitidas al Superior, sin ser sario escitativa de parte, y no que Zedillo dejaría de ocurrir ra que el Juzgado pensase en que de la recta intencion con 6, están tan persuadidos el idos de Zedillo, que desde ese re con agrado el personal del sta con señales de gratitud;

có en su oficio relativo. Lo que sobre esto extensamente expone el ciudadano Promotor, quien aunque indica haber habido infraccion del Reglamento del Tribunal en el nombramiento para juez de Zedillo, de la persona del Magistrado Rodriguez Villanueva, conviene en que no es fácil comprobados hechos, ni la Justicia federal puede proceder á investigarlos, por lo que no puede decirse con plena seguridad haberse violado los artículos trece y catorce de la Constitucion.

Considerando: que respecto á las garantías que se violaban con la relegacion de Zedillo á seis leguas fuera de esta ciudad, si pueden decirse violadas las siguientes: primera, la del artículo diez y ocho, pues cuando Ze-

pues con tal procedimiento y con el hecho de conocer él de la causa que se mandó instruir á Zedillo como á juez que fué de primera instancia en la causa de un reo llamado Quirino Aguilar, exponia haberse violado en su persona las garantías que otorgan los artículos trece, catorce, veinte, veintuno y veintidos de la Constitucion federal, porque no siendo dicho Magistrado el semanero en turno, fué designado por los otros dos Magistrados de la sala para instruir esa causa con infraccion del reglamento del Tribunal, y por lo mismo fué un juez ex post facto, señalado ad hoc, y como tal *especial* contra lo prevenido en el artículo trece de la Constitucion sin ser el previamente establecido por la ley, contra el artículo catorce de la misma; y con la relegacion se le aplicaba una pena proplamento tal antes de la terminacion del juicio, contra el artículo veintiuno, cuya pena como medida preventiva es inusitada ó de rarísimo uso contra el artículo veintidos. Visto el informe que sobre estos puntos anticipó la autoridad ejecutora de ellos, sobre ser le semanero actual, cuando se le designó para formar esa causa por los dos únicos Magistrados hábiles para designarlo, los que formaban la mayoría de la sala, lo que justifi-

dillo no está que no mere- ó delegacion enuenera en e go penal del pena, aun cor raro uso entrarse que no de ella por n con lo que se

Considera- mes que hoy al recurso po se trataba, y gidas las gar art. 8 de la l cion se tomó vo del peligro el día de la f espuestas en cías fueron r para ello nec poderse creer al Superior y archivarlas. que así se ob abogado y de dia ven sism Juzgado, y b

y que si se extralimitó al marcar dos leguas para la ausencia de Zedillo, oprimido por el peso de las circunstancias, está pronto á reportar las consecuencias de tal acto, hijo de la rectitud de sus intenciones, y con el que creyó y cree todavía haber protegido á Zedillo en ese día aun á peligro de incurrir en responsabilidad, muchísimo mas que con la suspension de su salida; pero que habiéndose mandado por la superioridad sustanciarse el recurso por sus trámites, tales autos de 8 del que fina, se revocan por contrario imperio, y por las razones antes espuestas, y en vista de haberse violado en la persona de Zedillo las garantías de los arts. 18, 21 y 22 constitucionales; con arreglo á la ley de 20 de Enero de 1869 se declara: Primero: que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Francisco Zedillo contra el confinamiento que se le impuso á seis leguas fuera de esta ciudad, porque con él se violaron las garantías de los artículos citados. Segundo: que la misma Justicia no lo ampara por las de los arts. 13 y 14 de la propia Constitucion, por no estar comprobados, ni deberse conocer por los Tribunales federales de los hechos que se alegan para fundar su violacion. Tercero: notifiquese al interesado y hágase saber al C. Promotor, previniendo al primero que en el acto de la notificacion reponga con el papel del sello correspondiente el del quinto que se ha invertido en este juicio, pagando así mismo en papel, el último suplido por este Juzgado. Cuarto: sáquense las copias respectivas para su publicacion en el Semanario Judicial de la Federacion, Diario Oficial del Supremo Gobierno y Periódico Oficial del Estado y remítase original de este expediente á la Suprema Corte de Justicia para su revision. Así definitivamente juzgando lo decretó y firmó el C. Lic. Mariano Sansalvador Juez interino de Distrito del Estado de Morelos; por ante mí de que doy fé.—*Mariano Sansalvador.*—*José Anastasio Rego, secretario.*—*Rúbricas.*

Es copia que certifico. Cuernavaca, Ju-

lio 19 de 1873.—*José Anastasio Rego, secretario.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Julio 17 de 1873.—Visto el recurso de amparo que con fecha 7 de Junio último, promovió en la ciudad de Cuernavaca, ante el Juez de Distrito del Estado de Morelos, D. Francisco Zedillo, alegando: que en un juicio que á consecuencia de un proceso criminal que se le ha mandado seguir instruyó, como encargado en calidad de conciliador del Juzgado 2º de 1ª instancia, está conociendo como Juez el Magistrado 2º del Tribunal Superior de dicho Estado Lic. D. Vicente Rodríguez Villanueva, quien ha mandado que el promovente salga á seis leguas de distancia de la Ciudad repetida, lugar de su residencia: que con la asignacion que el Tribunal dicho hizo del Magistrado que conoce como Juez, no siendo segun las leyes, se viola la garantía individual que otorga la Constitucion en los artículos 13 y 14, segun los cuales, nadie puede ser juzgado por tribunales especiales, ni por Tribunal que no sea el que previamente al hecho se haya establecido; y que con la relegacion á seis leguas, siendo una pena inusitada y sin los requisitos del derecho, se violan las garantías que protegen los artículos 20, 21 y 22 de la Constitucion. Vistas las constancias de autos, y considerando: 1º. Que respecto del primer punto de la queja presentada por Zedillo, no existen las puebas bastantes apoyando su acersion, y antes bien hay motivo para creer lo contrario. 2º. Que respecto del segundo punto, la relegacion de que se queja, es una pena inusitada contraria á la igualdad requerida por el derecho, y sin los requisitos que este prescribe para su imposicion, y 3º. Que en virtud de las consideraciones anteriores, no existe en el primer caso la violacion que reclama el que-

joso, y si existe en el segundo, conforme á los artículos constitucionales respectivos que invoca. Con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, y en mérito de los fundamentos expresados, se resuelve lo siguiente: Se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Morelos en la ciudad de Cuernavaca á 30 de Junio próximo pasado, en la cual declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á D. Francisco Zedillo por la violacion de garantías que alega, acogiendo á los artículos 13 y 14 de la Constitucion; y que la Justicia de la Union ampara y protege al mismo Zedillo, contra el confinamiento decretado y con el cual se han violado las garantías que reclama, invocando los artículos 20, 21 y 22 de la propia Constitucion.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de Distrito que las elevó en revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogasan.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*José García Ramirez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Julio 31 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

CRIMINAL

Causa instruida en el Juzgado de Distrito de Guanajuato, contra Vidal Mendoza, por falsificacion de moneda.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez primero suplente de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que el C. Magistrado del Tribunal de Circuito, reprobó el auto de sobrescumbiento decretado de conformidad con el parecer fiscal, por el C. Juez de Distrito propietario, en 26 de Setiembre último, mandando la prosuncion de la presente causa hasta sentencia definitiva, y en cumplimiento del superior auto se le han hecho al procesado los dos cargos siguientes: Primero: Del delito de falsificacion de moneda. Segundo: Si no es falsificador, el de encubridor.

El único fundamento de ambos cargos consiste, en el hecho de haberse encontrado en poder de Vidal Mendoza, doscientos cuarenta y tres pesos en moneda falsa, y los preceptos legales que se dicen infringidos siguiendo la opinion del Promotor fiscal del Tribunal de Circuito, son los artículos 699, 682 y 56 del Código penal.

El primero de los artículos citados establece las penas que deben imponerse á los falsificadores, y aunque está probado en la presente causa que se ha cometido este delito supuesto que las monedas de que se trata, han sido calificadas por dos peritos como falsas, no hay una prueba ni semiplena que demuestre que el procesado es el autor de esta falsificacion. La presuncion que deduce el representante del Ministerio público en Querétaro, no es ahora ni una presuncion *juris*, por haberse derogado la antigua legislacion en esta materia por el Código penal vigente.

El artículo 682 no tiene aplicacion en esta causa, porque Vidal Mendoza no ha hecho de la moneda falsa que se encontró, ni